

BOLIVIA PRESS 1999 – N° 11
(19 de octubre de 1999)

Responsable: CEDIB en el marco del programa INFOBOLIVIA

En este boletín:

I NOTICIAS COMENTADAS

1. Multitudinaria marcha de protesta en Santa Cruz
2. Se creó la primera Empresa Laboral Petrolera de Bolivia
3. Conflicto por la importación de pollos chilenos
4. Casinos de Diodato abren importante vía para destapar corrupción
5. Motín en la flamante cárcel de El Abra

II. TEMA DE ANÁLISIS: La utópica reestructuración de la Policía

III. MISCELÁNEA

I NOTICIAS COMENTADAS

1. MULTITUDINARIAS MARCHAS DE PROTESTA EN SANTA CRUZ Y LLALLAGUA

LOS HECHOS. Cerca de quince mil ciudadanos, convocados por el Comité Cívico de Santa Cruz, marcharon en repudio al constante incremento del precio de los carburantes y a la posible elevación de las tarifas de energía eléctrica. El presidente del Comité Cívico pidió al Gobierno que revise el D.S. 24914, que es el que fija la norma para determinar los precios de los hidrocarburos, ya que la elevación de éstos por una parte frena el desarrollo agropecuario y por otra afecta el poder adquisitivo de los salarios de la población. Reclamó asimismo una participación real de la ciudadanía en las decisiones del gobierno. A los pocos días tuvo lugar otra marcha similar en Llallagua con los mismos contenidos, pero haciendo hincapié además en los efectos negativos de la privatización de la Caja Nacional de Salud.

COMENTARIO. La política económica del Gobierno viene generando un descontento social creciente, y no parece que la tan proclamada "lucha contra la pobreza" pueda paliar ese descontento. Cuando se capitalizó YPFB se tenía claro que dicha operación iba a afectar los ingresos del Tesoro General de la Nación, pero nadie previó la magnitud del problema que se iba a generar con las sucesivas alzas de precios de los hidrocarburos, dependientes de los precios internacionales y no de las condiciones de la producción petrolera interna. Es un efecto en cadena que puede generar fuertes movilizaciones de descontento popular. Por lo demás la historia moderna del país muestra que cuando Santa Cruz se moviliza nunca es sin consecuencias.

2. SE CREÓ LA PRIMERA EMPRESA LABORAL PETROLERA DE BOLIVIA

LOS HECHOS. El 6 de octubre trabajadores petroleros y gobierno firmaron un convenio mediante el cual se crea la primera Empresa Laboral Petrolera (ELP) en el país (y en Sudamérica). De esta manera 1.600 trabajadores petroleros calificados pasarán a ser socios de seis nuevas empresas a ser privatizadas, asegurando además de esta manera la durabilidad de su empleo. Los trabajadores petroleros deberán pagar (a lo largo de 10 años y con intereses de la tasa Libor) 20 millones de dólares por la transferencia de 33 estaciones de servicio, 6 plantas de almacenaje y 4 engarradoras de gas licuado, además de otros terrenos y bienes.

COMENTARIO. Pese a que esta actitud de los trabajadores petroleros en los hechos perfora las posibilidades de resistencia social a la privatización de YFPF "residual" (ver Bolivia Press 7, Noticia Nr. 2), resistencia que en todo caso tenía pocas probabilidades de éxito, no se puede negar que esta negociación aparentemente positiva de los trabajadores con el Gobierno abre las puertas a una nueva experiencia a la que habrá que estar atentos. La figura no es la que plantearon por ejemplo los trabajadores del LAB cuando quisieron ser ellos los capitalizadores de la empresa aérea; ahora los trabajadores serán sólo socios de las compañías privatizadoras, y habrá que ver si ello les permite un suficiente campo de acción para la gestión de las empresas, o si van a tener que atenerse a las decisiones de sus socios mayores.

3. CONFLICTO POR LA IMPORTACIÓN DE POLLOS CHILENOS

LOS HECHOS. La empresa chilena Tarapacá (ubicada en Arica) recibió el pase zoo-sanitario oficial del Ministerio de Agricultura de Bolivia para ingresar pollos al país. Al ser Arica una zona franca no paga impuestos por los insumos que importa (incluidos los granos bolivianos, que resultan allá más baratos que en la propia Bolivia), además de que por la ausencia de lluvia tampoco se necesita construir galpones. Y por su parte el estado chileno incentiva las exportaciones con la devolución de un 9 % del valor de las mismas. Ante esta perspectiva, la Asociación Nacional de Avicultores (ANA), temerosa del perjuicio que puede suponer para la avicultura nacional esta competencia desigual, demanda una elevación de aranceles (del 10 al 40 %) para los pollos chilenos, y hace notar que Bolivia es el único país que no restringe las importaciones.

COMENTARIO. El ejecutivo de ANA no hace más que atenerse a la realidad. Desde que el 21060 estableció la libertad de importación irrestricta, la producción nacional, tanto la agropecuaria como la industrial y agro-industrial, se vio agobiada por una competencia difícilmente sostenible, no sólo porque el punto de partida de los países vecinos es mucho más favorable (en términos de infraestructura básica y disponibilidad de insumos propios), sino también porque en muchos casos se tiene que competir con productos que en sus países de origen están subvencionados (como es el de los pollos en cuestión), mientras el estado boliviano es el único que se niega a subvencionar producción alguna. Así es como han ido cerrando centenares de fábricas y se han visto obligadas a emigrar decenas de miles de familias campesinas. Por lo demás es dudoso que el consumidor boliviano pueda acostumbrarse a un pollo alimentado con harina (léase desechos) de pescado...

4. CASINOS DE DIODATO ABREN IMPORTANTE VÍA PARA DESTAPAR CORRUPCIÓN

LOS HECHOS. El tema de los casinos que eran parte de la red de Marino Diodato, y que hace tiempo se hallaba atrapado por la falta de voluntad del Parlamento (y en especial de la ADN) para investigarlo, ha entrado en una nueva etapa en el momento en que el Juez Santa María (al que por su parte la fiscal Lourdes Villarroel acusa de negligencia en el tratamiento del caso) ha ordenado la aprehensión del General Iriarte (hombre de confianza del Presidente), además de pedir la inclusión de Olga Prada (sobrina de la Primera Dama y esposa de Iriarte) en el proceso penal por el funcionamiento clandestino de los casinos. A esto se añade la complicación de la alcaldesa de La Paz (Lupe Andrade) y del Ministro de Vivienda (Rubén Poma) por sus visitas a la hacienda Perseverancia (actualmente propiedad de Diodato y antiguamente de varios narcotraficantes). Pero la mayor novedad es la inclusión en el juicio del Ministro de Salud Guillermo Cuentas, del embajador de Bolivia en Costa Rica Jaime Soria, y del presidente del Fondo de Desarrollo Campesino Freddy Amador, todos ellos por complicación con los casinos.

COMENTARIO. Si bien no queda claro el rol del dirigente adenista Fernando Kieffer, el más interesado en que se investigue el tema de los casinos (a sabiendas de que ello afecta a varios de sus camaradas de partido), es evidente que los casinos, que desde hace años vienen siendo objeto de debate y en los que probablemente se juegan importantes intereses económicos, salpican a muchos gobernantes y ex gobernantes. Hoy nadie puede dudar de que en los casinos ha habido un permanente juego de intereses ilegales, y ante esto no sirven los argumentos de que los casinos (a través de la Lotería Nacional) producían dinero para beneficencia. La beneficencia mafiosa nunca ha sido saludable para la sociedad, por lo que será importante que las actuales investigaciones sigan su curso.

5. MOTÍN EN LA FLAMANTE CÁRCEL DE EL ABRA

LOS HECHOS. Los más de 300 reclusos de la cárcel de El Abra (Cochabamba) se amotinaron para impedir el ingreso de los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), que con ayuda de perros policías pretendía reforzar la seguridad a raíz del descubrimiento de plantaciones de marihuana dentro del recinto carcelario (hecho que los reclusos desmienten). El Viceministro de Régimen Penitenciario dirigió personalmente el operativo que acabó con el motín y cuyo resultado, además de la requisita de setenta armas blancas, fue la remisión de los siete internos “más peligrosos” al penal de Chonchocoro.

COMENTARIO. El sistema penitenciario boliviano, que dentro de su miseria estructural siempre tuvo ciertos rasgos humanos (en comparación con otros países), en los últimos tiempos se ha visto seriamente gravado por el hacinamiento insostenible y por la incidencia de la Ley 1008, que viene distorsionando la esencia misma del sistema (en las cárceles de Cochabamba un 90 por ciento de los

reclusos lo son a causa de dicha ley, y no porque sean narcotraficantes ni drogadictos, sino en el peor de los casos humildes eslabones –se puede sospechar que inocentes-- de la gran cadena). Pero toda la problemática penitenciaria se ve todavía más agravada cuando se intenta, como en el caso de la nueva cárcel de Chonchocoro o de El Abra, incorporarle rasgos de modernidad, que lo único que hacen es volver las cárceles cada vez más inhumanas y menos aptas para algo que se parezca a rehabilitación. Es en este contexto que se puede comprender los últimos sucesos de El Abra. Sólo cabe recomendar a las autoridades penitenciarias los libros especializados de Juan Carlos Pinto.

TEMA DE ANÁLISIS: LA UTÓPICA REESTRUCTURACIÓN DE LA POLICÍA

Los datos de la prensa

Hace meses que la prensa viene ocupándose de la anunciada reestructuración de la Policía, y sobre todo de uno de sus componentes fundamentales que es la expulsión de aquellos policías que supuestamente no están a la altura de su misión institucional. La mencionada reestructuración ha mostrado permanentes retrasos y contradicciones, además de haber generado serios conflictos al interior de la institución del orden, así como entre algunos de sus miembros y el Ministerio de Gobierno.

Pero en los últimos quince días el contenido y el tono de las noticias de prensa han alcanzado niveles que ameritan un análisis sereno. Tras haber sido destituidos varios jefes de la PTJ de La Paz (por irresponsabilidad en la investigación de la violación y asesinato de una niña), el 9 de octubre el periódico Los Tiempos reproduce un reportaje de La Prensa con el título “Confirman vínculos entre la PTJ y delincuentes”, a partir de que la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados habría verificado que al interior de la Policía existen “corporaciones delictivas”.

Seis días más tarde el periódico La Razón –usando un lenguaje todavía más duro-- titula un reportaje con las palabras “La reestructuración huele a podrido”, en el que se informa que los 152 policías que según informes oficiales debían haber sido retirados (“por burros y corruptos”, en palabras del propio Ministro de Gobierno) han elaborado una lista de otros 172 “verdaderos burros y corruptos” que alguien estaba protegiendo, y añade la noticia de que el Comandante José Luis Medina iba a ser destituido.

Efectivamente al día siguiente La Prensa comunica que el General Roberto Pérez Tellería es el nuevo comandante, pero que la crisis continúa, pese a la orden directa del Presidente de la República de solucionar los problemas financieros, disciplinarios y morales de la institución, añadiendo que el nuevo comandante parece contar con el respaldo de la Embajada Norteamericana. Otro órgano de prensa titula la misma información de la destitución del General Medina en los siguientes términos: “Medina se va, ¿por burro o por corrupto?”.

Finalmente –por ahora-- La Razón titula “La Policía es un búnker de enriquecimiento ilícito”, refiriéndose a un lapidario informe elaborado por un equipo colombiano sobre la institución del orden en Bolivia. Dicho equipo multidisciplinario de la Policía colombiana, tras analizar los recursos humanos, el sistema educativo, la selección del personal, la gestión organizacional y las finanzas, llega a la conclusión de que la Policía boliviana cobija el enriquecimiento ilícito, la inmoralidad y la anarquía total.

Por su parte el periódico Opinión se pregunta si un policía puede vivir con 300 bolivianos de sueldo (monto que tras 28 años de servicio puede ascender a 1.080.-), y afirma que los oficiales de baja graduación viven en condiciones de pobreza, a diferencia de los de alta jerarquía que, pese a que tampoco tienen grandes salarios (2.200.- gana un coronel) viven muy bien no se sabe de dónde...

Intento de análisis

El problema de la Policía Nacional es muy antiguo, pero en los últimos tiempos se está revelando como un auténtico drama. Cada día la sociedad clama con más fuerza por seguridad, y a la vez está segura de que la Policía es una fuente más de inseguridad. Las denuncias de incapacidad y corrupción policial se acumulan. Los anuncios del Gobierno sobre la reestructuración de la institución del orden ya suenan a verso repetido. De la propia institución surgen nuevas denuncias y quejas. Pero pasan los meses y no hay novedad, salvo la novedad de que la sociedad –y la prensa que es su expresión más articulada-- muestra cada vez menos respeto por una instancia estatal que para ser útil y eficaz debería empezar por ser respetada. Acerca de ella y de sus mandos se puede hablar y escribir en términos insultantes que no se usan para ninguna otra repartición oficial.

Y los titulares de prensa que hemos repasado –y que no son los únicos-- nos están mostrando que el descrédito de la institución del orden es creciente. Y peligroso.

Entretanto los oficiales y suboficiales, como los simples agentes sin formación especial, se saben poco queridos e incluso despreciados. Los miembros honestos de la institución, que sin duda también los hay, tienen que cargar con la mala fama de los demás. Y sin autoestima es imposible cumplir una misión tan difícil como la salvaguarda del orden. La selección del personal policial es deficiente, su formación todavía más deficiente, y su remuneración es simplemente humillante. En tales condiciones resulta un sarcasmo que el Presidente de la República les diga a los policías que piensen en la moral, no en el sueldo. ¿Queda mucho campo para la preocupación moral cuando no se gana lo suficiente para poder garantizar siquiera el desayuno de los propios hijos? Esta irresponsabilidad familiar ¿no es de entrada des-moralizante?

Parece que todo intento de re-formar o re-estructurar la Policía está condenado al fracaso. Que la única posibilidad sería, en un estado que se quiere modernizar y que se ve amenazado por una inseguridad creciente, es la de re-fundar la institución, con nueva estructura y nuevos estatutos, con nuevos criterios de selección, con nuevo plan de formación de los oficiales y de todo el personal, y sobre todo con nuevo presupuesto. Porque todo lo anterior requiere recursos económicos, pero sobre todo se requiere recursos para pagar sueldos justos, es decir sueldos dignos que le permitan al policía tener seguridad y autoestima, condiciones básicas para poder preocuparse de la moral. ¿De dónde sacar esos recursos? ¿Tal vez de los famosos “fondos reservados” del Ministerio del Interior, que hasta ahora sólo han servido para represión y corrupción?

MISCELÁNEA

- El humor sostenido, el lenguaje poético y una historia interesante le valieron a la novela “Alguien más a cargo”, de Cé Mendizábal, el II Premio Nacional de Novela --organizado por Editorial Santillana, AFP Previsión y el Viceministerio de Cultura--. Además de 10.000 dólares para el autor, la novela será publicada por Editorial Santillana.
- Continúan los incendios incontrolados sobre todo en los departamentos de Santa Cruz y Beni, pero también en Cochabamba y Tarija. El satélite del proyecto BOLFOR detectó hasta 351 focos, y según cálculos de la misma institución las hectáreas quemadas hasta el pasado 12 de octubre suman 3,3 millones. Peligro especial representan los incendios en Cascabel (Santa Cruz) y Buló Buló (Cochabamba), zonas de explotación petrolera.
- Una segunda fuga de gas natural agravó la crisis en el pozo Madrejones X-1001, operado por Pluspetrol. En espera de equipos procedentes de Estados Unidos, lo único que se pudo hacer fue orientar el gas hacia arriba para que sólo dañe --gravemente-- la atmósfera y no afecte la superficie boscosa.
- El periódico brasilero “O Estado” da cuenta de la grave crisis financiera que atraviesa la VASP, capitalizadora del LAB, ya que sus deudas sobrepasan los 1.200 millones de dólares, lo que la lleva a practicar el “canibalismo técnico” (desmontar aviones para reponer otros). Según trabajadores y pilotos del LAB, esta crisis afecta seriamente a la empresa nacional, que se ve obligada a achicar su flota.
- Pese a intimidaciones políticas, el Ministerio Público develó pruebas de corrupción que involucran al ex director del INRA-Santa Cruz, José Luis Santisteban, acusado de haber quemado títulos de tierras saneadas para sustituirlos por otros falsos y haber permitido el despojo de tierras a propietarios legítimos.
- Para la privatización de Vinto se está gestando en Huanuni una asociación entre una empresa privada y los trabajadores (que de momento ya han comprado los respectivos términos de referencia), una alianza que el Ministro de Comercio Exterior califica --si efectivamente se diera-- como “una revolución total”.
- Con enorme aglomeración en las últimas fechas, se han inscrito en las nueve cortes electorales del país 664.000 nuevos electores, cifra que se considera óptima y que se puede interpretar como un “espaldarazo al sistema democrático”, aún descontando la depuración de inscripciones defectuosas (o fraudulentas) que todavía la cortes departamentales tienen por delante.

En la esperanza de que esta buena voluntad electoral traiga consigo una profundización del sistema democrático, enviamos a nuestros lectores un cordial saludo envuelto en los vapores del ambiente municipal preelectoral.